

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA
Sección Tercera
Sede Granada

RECURSO NÚM. 1/2013

SENTENCIA NÚM. 1231 DE 2.017

Ilma. Sra. Presidenta:

Dª Inmaculada Montalbán Huertas

Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a:

D. Antonio Videras Noguera

Dª María del Mar Jiménez Morera

En la Ciudad de Granada, a treinta de mayo de dos mil diecisiete.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, se ha tramitado el recurso **número 1/2013**, seguido a instancias de la procuradora **D.ª M.ª Mónica Navarro Rubio**, **Ensfontaines**, en nombre y representación de **Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales**, asistido por el letrado **D. Luis Martínez**.


Es parte demandada la **Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía**, asistida y representada por letrado de sus servicios jurídicos.

La cuantía del recurso es indeterminada.

Interviene como Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª Inmaculada Montalbán Huertas, quien expresa el parecer de la Sala.

Código Seguro de verificación:GS9D4C+4M8Zb7TA1DwvsNQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|---|--------------------------|------------|
| FIRMADO POR | INMACULADA MONTALBAN HUERTAS 30/05/2017 13:18:07 | FECHA | 30/05/2017 |
| | ANTONIO CECILIO VIDERAS NOGUERA 30/05/2017 13:19:00 | | |
| | MARIA DEL MAR JIMENEZ MORERA 30/05/2017 13:33:03 | | |
| ID. FIRMA | ws051.juntadeandalucia.es | GS9D4C+4M8Zb7TA1DwvsNQ== | PÁGINA 1/7 |


GS9D4C+4M8Zb7TA1DwvsNQ==

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El recurrente interpuso recurso contencioso administrativo contra la Resolución de fecha 31 de octubre de 2012 - dictada por la Secretaria General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior- por la que se concede al Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, la compensación económica por los gastos de funcionamiento de los colegios de procuradores de Andalucía para el ejercicio 2012; en el concreto extremo que acuerda abonar en concepto de gastos de funcionamiento la cantidad correspondiente al 5% del coste económico generado por las actuaciones profesionales efectuadas en el año natural anterior, entendiéndose que el límite establecido en el reglamento es el máximo a abonar por dicho concepto.

Admitido el recurso se acordó reclamar el expediente administrativo, que ha sido aportado.

SEGUNDO.- En su escrito de demanda el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales pretende el reconocimiento de 10% del coste económico generado por las actuaciones profesionales efectuadas en el año anterior. Solicitó la nulidad de la resolución impugnada por los siguientes motivos: vulneración del principio de inderogabilidad singular contenido en el artículo 52.2 de la ley 30/92; haber sido dictado por órgano manifiestamente incompetente; infracción del artículo 9.3 de la Constitución Española y de sus principios de legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción del arbitrariedad.

Asimismo solicitó sentencia que “ declare, conforme al artículo 53.2 de entonces vigente Decreto 67/2008 del 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita para el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía, que el importe abonar por los gastos de funcionamiento del servicio de asistencia jurídica gratuita, para el año 2012, es el 10% del coste económico generado por las actuaciones profesionales efectuadas durante el año natural anterior”. Con condena a la administración al abono de las costas procesales.

TERCERO.- En su escrito de contestación a la demanda el letrado de la Junta de Andalucía se opuso a las pretensiones de la actora; y solicitó la desestimación del recurso contencioso administrativo por ser conforme a derecho de la resolución impugnada. Con imposición de costas a la parte actora.

CUARTO.- Recibido el pleito a prueba y admitida la documental propuesta, que fue practicada, las partes presentaron sendos escritos de conclusiones, por lo que quedó visto para sentencia.

| | | | |
|-------------|---|--------|------------|
| FIRMADO POR | INMACULADA MONTALBAN HUERTAS 30/05/2017 13:18:07 | FECHA | 30/05/2017 |
| | ANTONIO CECILIO VIDERAS NOGUERA 30/05/2017 13:19:00 | | |
| | MARIA DEL MAR JIMENEZ MORERA 30/05/2017 13:33:03 | | |
| ID. FIRMA | ws051.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 2/7 |


GS9D4C+4M8Zb7TAlDwvsNQ==

Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso, que tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El primer motivo de nulidad de la demanda se ampara en el artículo 62.2 de la Ley 30/92. Denuncia vulneración del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, previsto en el artículo 52.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, según el cual: *“Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas”*.

Sostiene la parte actora que la resolución impugnada, cuando acuerda abonar en concepto de gastos de funcionamiento la cantidad correspondiente al 5% del coste económico, infringe y deja sin efecto el artículo 53.2 del Decreto 67/2008 del 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía - vigente en el momento de dictarse el acto administrativo recurrido- y que fijaba como compensación económica “por gastos de funcionamiento la cantidad correspondiente al 10 por 100 de coste económico generado porque las actuaciones profesionales efectuadas en el año natural anterior”.

La administración replica que la infracción denunciada exige que el acto sea dictado por un órgano con igual o superior jerarquía al órgano del que emanó la disposición reglamentaria. En este caso la resolución la dicta la Secretaría General Técnica, órgano subordinado a una de las Consejerías del órgano autor del Reglamento, que fue el Consejo de Gobierno.

Efectivamente, el principio de inderogabilidad singular de disposiciones generales se ha configurado como un límite material impuesto a las disposiciones administrativas de carácter general. Este principio parte del principio “*legem paterem quod ipso feciste*” (padece la norma tal y como la hiciste), que impone que los reglamentos deben ser cumplidos sin que el órgano que los aprobó u otro superior pueda derogar singularmente su aplicación en un supuesto concreto. La justificación a este principio podemos encontrarla en dos principios consagrados en la Constitución: en primer lugar, el principio de igualdad, recogido en el artículo 14, según el cual no se puede derogar una norma para un caso concreto; y en segundo lugar, el principio de legalidad del artículo 9.3, según el cual la Administración esta sometida al ordenamiento jurídico, también por tanto, a sus propios reglamentos. En realidad, la explicación más correcta de la regla de la inderogabilidad singular de los reglamentos se encuentra en la construcción técnica del principio de legalidad

Código Seguro de verificación:GS9D4C+4M8Zb7TA1DwvsNQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| FIRMADO POR | INMACULADA MONTALBAN HUERTAS 30/05/2017 13:18:07 | FECHA | 30/05/2017 |
| | ANTONIO CECILIO VIDERAS NOGUERA 30/05/2017 13:19:00 | | |
| | MARIA DEL MAR JIMENEZ MORERA 30/05/2017 13:33:03 | | |
| ID. FIRMA | ws051.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 3/7 |
|  | | | |
| GS9D4C+4M8Zb7TA1DwvsNQ== | | | |



del administración, la cual está sometida, como sujeto de derecho que es, a todo el ordenamiento y, por tanto, también a sus propios reglamentos. De manera que al estar sometida a sus reglamentos y estos no prever la posibilidad de su dispensa, la llamada derogación singular sería en rigor una infracción del reglamento mismo. Como dice García de Enterría, “es cierto que la administración tiene también atribuido el poder derogatorio del reglamento (que forma parte de la protesta reglamentaria), pero el mismo no puede interpretarse, sin ofensas definitiva e insalvable al principio de legalidad, en el sentido de poder desconocer u olvidarse del reglamento en los casos concretos”. Dentro de este marco normativo y jurisprudencial, necesariamente ha de decaer el primer motivo de nulidad de la demanda; pues la resolución impugnada no emana de órgano igual o superior al que dictó el reglamento. Dentro de este marco normativo y jurisprudencial, necesariamente ha de decaer el primer motivo de nulidad de la demanda; pues la resolución impugnada no emana de órgano igual o superior al que dictó el reglamento.

El segundo motivo de nulidad refiere ausencia de competencia de la Secretaría General Técnica para el dictado de la resolución impugnada. Sostiene el recurrente que tal órgano no está incluido en la delegación de competencias para el reintegro de subvenciones, que realiza la Orden de 19 de agosto de 2009 (BOJA número 161). Sin embargo, el artículo 4 de la referida orden (página 49 del BOJA), expresamente dispone : “se delegan en la persona titular de la Secretaria General Técnica... las siguientes competencias: 2. En materia de presupuestos y contratación: a) la aprobación de los gastos en el ámbito de las competencias atribuidas al titular de la Consejería en los artículos 50.1 de la ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y artículo 26.2 h) de la ley 9/2007, 22 de octubre, de la Administración de la Junta Andalucía, su compromiso de liquidación, así como interesar de la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de las correspondientes pagos, respecto de todos los créditos de sus correspondientes ámbitos presupuestarios”. Razones estas que determinan la desestimación de este motivo de nulidad.

El tercer motivo de impugnación se articula a través del artículo 62.2 de la ley 30/92. Denuncia infracción del artículo 9.3 de la Constitución Española y de sus principios de legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción del arbitrariedad. Reprocha que la resolución impugnada contravenga la normativa reglamentaria cuando acuerda disminuir al 5 por 100 la compensación económica por los gastos de funcionamiento para el ejercicio 2012. Para resolver la cuestión jurídica controvertida debemos acudir al tenor literal del art. 53.2 del Decreto 67/2008. Dice así: “La Consejería competente en materia de justicia tramitará el pago a los Consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores para atender los gastos de funcionamiento por la cantidad correspondiente al 10 por 100 del

Código Seguro de verificación:GS9D4C+4M8Zb7TA1DwvsNQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|---|--------------------------|------------|
| FIRMADO POR | INMACULADA MONTALBAN HUERTAS 30/05/2017 13:18:07 | FECHA | 30/05/2017 |
| | ANTONIO CECILIO VIDERAS NOGUERA 30/05/2017 13:19:00 | | |
| | MARIA DEL MAR JIMENEZ MORERA 30/05/2017 13:33:03 | | |
| ID. FIRMA | ws051.juntadeandalucia.es | GS9D4C+4M8Zb7TA1DwvsNQ== | PÁGINA 4/7 |


GS9D4C+4M8Zb7TA1DwvsNQ==

coste económico generado por las actuaciones profesionales efectuadas en el año natural anterior”. Esta norma experimentó una reforma a través del Decreto 537/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita (publicado en el BOJA nº 254 de 31 de diciembre de 2012), según la cual el importe de los gastos se determinará mediante Orden de la Consejería y se establece un importe máximo del 5% y una serie de obligaciones documentales a cargo de los Colegios Profesionales. Esta reforma, conforme a su Disposición Final Segunda, entró en vigor el 1 de enero de 2013 y ha sido declarada conforme a derecho en Sentencia del Tribunal Supremo número 1069/2016, de 12 de mayo de 2016 (Recurso número 2953/2014.Roj:STS2101/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2101), donde se declara lo siguiente: “La alteración del modelo precedente, introduciendo elementales medidas de control y justificación del gasto no solo no infringen los principios que la parte cita de forma retórica, sin justificación concreta de la lesión que denuncia, sino que son materialización de una correcta política de gasto, que para nada cercena la calidad de las prestaciones que está llamada a cubrir la Corporación recurrente, sino que lo que obliga es a justificar su prestación (medida, por otra parte, elemental, y, como tal, sorprende que pueda ser cuestionada), siempre dentro de los límites (que no queda acreditado que sean irrazonables) que la política económica de contención del gasto público impone, dada la complicadísima coyuntura económica, y prueba de cuanto decimos es el contenido de los preceptos injustificadamente cuestionados”.

En el presente caso podemos comprobar, como afirma el Colegio demandante, que la resolución impugnada se dicta antes de la reforma del referido artículo 53.2, que expresamente ordenaba tramitar “ el pago” a los Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores para atender los gastos de funcionamiento por la cantidad correspondiente al 10 por 100 del coste económico generado por las actuaciones profesionales efectuadas en el año natural anterior. Si bien la resolución impugnada justifica la disminución al 5 por 100 en la situación de crisis económica documentada en informes técnicos, lo cierto es que vulneró el principio de legalidad al no respetar la norma reglamentaria reguladora de la cuestión que, en contra de lo afirmado por la administración, no establecía un límite máximo sino una fórmula automática, que posteriormente ha sido derogada. La administración no puede olvidarse de su reglamentos, tampoco en los casos de crisis económica.

En consecuencia, procede estimar el recurso contencioso administrativo y anular la resolución, en el extremo que se impugna, por infracción del ordenamiento jurídico; y, asimismo, declaramos que el importe a abonar a la recurrente, por los gastos de funcionamiento del servicio de asistencia jurídica gratuita, para el año 2012, es el 10% del coste económico generado por las actuaciones profesionales efectuadas durante el año natural anterior.

SEGUNDO.- En lo que respecta a las costas procesales se condena al

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| Código Seguro de verificación:GS9D4C+4M8Zb7TAlDwvsNQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verificav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | | |
| FIRMADO POR | INMACULADA MONTALBAN HUERTAS 30/05/2017 13:18:07 | FECHA | 30/05/2017 |
| | ANTONIO CECILIO VIDERAS NOGUERA 30/05/2017 13:19:00 | | |
| | MARIA DEL MAR JIMENEZ MORERA 30/05/2017 13:33:03 | | |
| ID. FIRMA | ws051.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 5/7 |
|  GS9D4C+4M8Zb7TAlDwvsNQ== | | | |

abono de las mismas a la administración demandada, cuyas pretensiones han sido totalmente desestimadas. A tal efecto, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, señalamos como cifra máxima a que asciende la imposición de costas en concepto de honorarios de letrado la cantidad de 1.500 €. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por este Tribunal en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala, por la autoridad que nos confiere la Constitución Española, dicta el siguiente

FALLO

ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por la procuradora ~~INMACULADA MONTALBAN HUERTAS~~ nombre y representación de Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales, contra la Resolución de fecha 31 de octubre de 2012 - dictada por la Secretaria General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior – que se anula y deja sin efecto en el concreto extremo que acuerda abonar en concepto de gastos de funcionamiento la cantidad correspondiente al 5% del coste económico generado por las actuaciones profesionales efectuadas en el año natural anterior. Declaramos que el importe a abonar a la recurrente, por los gastos de funcionamiento del servicio de asistencia jurídica gratuita, para el año 2012, es el 10% del coste económico generado por las actuaciones profesionales efectuadas durante el año natural anterior. Con condena a la administración demandada al abono de las costas procesales causadas hasta un máximo de mil quinientos euros conforme a lo expuesto en el anterior fundamento de derecho.

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase, y una vez firme, devuélvanse las actuaciones, con certificación de la misma, al Juzgado de procedencia, para su notificación y ejecución, interesándole acuse recibo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con las prevenciones del artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, haciéndoles saber que, contra la misma, cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, limitado exclusivamente a las cuestiones de derecho, siempre y cuando el recurso pretenda fundarse en la infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, y hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora. Para la admisión del recurso será

Código Seguro de verificación:GS9D4C+4M8Zb7TA1DwvsNQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|---|--------|------------|
| FIRMADO POR | INMACULADA MONTALBAN HUERTAS 30/05/2017 13:18:07 | FECHA | 30/05/2017 |
| | ANTONIO CECILIO VIDERAS NOGUERA 30/05/2017 13:19:00 | | |
| | MARIA DEL MAR JIMENEZ MORERA 30/05/2017 13:33:03 | | |
| ID. FIRMA | ws051.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 6/7 |


GS9D4C+4M8Zb7TA1DwvsNQ==



necesario que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, de conformidad con los criterios expuestos en el art. 88.2 y 3 de la LJCA. El recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido, y seguirá el cauce procesal descrito por los arts. 89 y siguientes de la LJCA. En iguales términos y plazos podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma.

El recurso de casación deberá acompañar la copia del resguardo del ingreso en la Cuenta de Consignaciones núm.: 2069000024000113, del depósito para recurrir por cuantía de 50 euros, de conformidad a lo dispuesto en la D.A. 15ª de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición Adicional Decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

Código Seguro de verificación:GS9D4C+4M8Zb7TA1DwvsNQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verificarmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

| | | | |
|-------------|---|--------|------------|
| FIRMADO POR | INMACULADA MONTALBAN HUERTAS 30/05/2017 13:18:07 | FECHA | 30/05/2017 |
| | ANTONIO CECILIO VIDERAS NOGUERA 30/05/2017 13:19:00 | | |
| | MARIA DEL MAR JIMENEZ MORERA 30/05/2017 13:33:03 | | |
| ID. FIRMA | ws051.juntadeandalucia.es | PÁGINA | 7/7 |


GS9D4C+4M8Zb7TA1DwvsNQ==